

Expedient núm. 74/2021

Resolució núm. 181/2021

**CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
I BON GOVERN DE LA COMUNITAT VALENCIANA**

COMISSIÓ EXECUTIVA

President: Sr. Ricardo García Macho

Vocals:

Sra. Emilia Bolinches Ribera

Sr. Lorenzo Cotino Hueso

Sra. Sofia García Solís

València, 27 de juliol de 2021

Reclamant: Belvento Solare, SL

Subjecte contra el qual es formula la reclamació: Ajuntament d'Aigües

VISTA la reclamació número **74/2021**, interposada per la societat Belvento Solare, SL, formulada contra l'Ajuntament d'Aigües, i sent ponent el vocal Sr. Lorenzo Cotino Hueso, s'adopta la següent

RESOLUCIÓ

ANTECEDENTS

Primer. - Segons es desprén de la documentació que consta en l'expedient, el [REDACTED] en representació de la societat Belvento Solare, SL, va presentar per via telemàtica en data 27 de març de 2021 una reclamació contra l'Ajuntament d'Aigües, amb número de registre GVRTE/2021/800024, dirigida al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. En la qual es reclamava contra la falta de resposta per part de l'Ajuntament d'Aigües a una sol·licitud de 27 certificacions, presentada el 9 de desembre de 2020, en relació amb un projecte de reparcel·lació forçosa.

Concretament, les 27 certificacions sol·licitades de l'Ajuntament d'Aigües eren les següents:

- *CERTIFICACIÓN N° 1: Sobre la parcela Camí Real 5, que nos certifiquen la superficie real de nuestra parcela, comparando con la superficie catastral teórica.*

- *CERTIFICACIÓN N° 2: Sobre esta superficie de CAMI REAL 5, que nos certifiquen los m2 que pueden verse afectados por las pretensiones de los promotores, estos o cualesquiera otros que puedan actuar; no sólo para la construcción del vial perpendicular; sino que además para toda el área de influencia como son aceras y retranqueos obligatorios para vallar el resto de la parcela. No sólo hay que considerar los m2 del propio vial, sino de todo aquello de lo que se pierda todavía más el uso o disponibilidad de nuestra parcela.*

- *CERTIFICACIÓN N° 3: Que nos certifiquen la superficie del triángulo de la parcela que quedaría por encima del vial PERPENDICULAR EN NUESTRA PARCELA previsto, así como de la limitación de su uso Y DISPOSICIÓN para poderlo vallar.*

- *CERTIFICACIÓN N° 4: Como paso previo a cualquier análisis sobre la presunta legalidad de este proyecto de reparcelación, tenemos que conocer con una certificación global e individualizada, la superficie TOTAL Y REAL de la UE-2 APROBADA en las NNSS y los motivos de las discrepancias que aparecen, así como de los responsables de su autorización. También que incluyan el número de propietarios afectados y de su superficie individual dentro de la UE2.*

- CERTIFICACIÓN N° 5: *Por tanto, se pide el certificado de la superficie que dice que tiene EN PROPIEDAD AQUAVIVA 2000 SL haciendo constar los m² propiedad de ellos, SU LOCALIZACIÓN, y el porcentaje de propiedad de AQUAVIVA 2000 SL dentro de la UE2.*
- CERTIFICACIÓN N° 6: *Les solicitamos que nos certifique que todos los terrenos, de todos los propietarios, afectados de la UE-2 disponen del mismo valor; catastral, de igual repercusión fiscal y de tipo impositivo, y por tanto, de igualdad en el Impuesto de Bienes Inmuebles, que en nuestro caso asciende a 2.055,62€/año.*
- CERTIFICACIÓN N° 7: *Solicitamos se dé traslado inmediato a la Administración Tributaria que supervise la actuación de esta Promoción de la UE2, para conocimiento de la AEAT, donde conste la tributación de IBI de Camí Real, y se compare la tributación con los demás propietarios afectados de la UE2 y que nos certifiquen la valoración que ha dado la Administración a efectos expropiatorios mínimos. Y que toda esta actuación se ajusta a los requisitos Tributarios obligados por esa Corporación de Aigües debida a su situación económica que viene arrastrando.*
- CERTIFICACIÓN N° 8: *Queremos que nos certifique el Departamento de Intervención la legalidad de la relación del traspaso de sus derechos urbanísticos que tenía Yuberotes Urbana, S.L, antigua tenedora del convenio urbanístico y AQUAVIVA 2000, S.L., y que certifiquen que Yuberotes Urbana SL no tiene ninguna obligación ni pendiente ni prescrita con el Ayuntamiento.*
- CERTIFICACIÓN N° 9: *Como esta empresa propietaria de la parcela en Camí Real 5, no ha tenido ningún contacto ni con Pérez Segura Asociados ni con el promotor/propietario, desde luego no se cumplen las precauciones del art. 108.b LOTUP. Por tanto, les solicitamos que se expida una certificación donde conste que no se cumplen las precauciones del art 108.b, por no existir ningún acuerdo ni contacto con el promotor/propietario. En el caso que no se cumpla estas precauciones, debe de constar en la resolución de la Corporación al respecto.*
- CERTIFICACIÓN N°10: *En el Proyecto de los Promotores, consta mal escrito nuestro nombre, se empeñan en citarnos como BEVENTO SOLARE, S.L., donde les falta una L entre la primera E y la V. Les recordamos que el nombre de esta empresa es BELVENTO SOLARE, SL. Les rogamos que nos certifiquen que les han comunicado a los promotores nuestro nombre correcto y que, si no lo han hecho antes, que ahora les notifiquen a los PROMOTORES nuestro nombre bien escrito para ser citados correctamente.*
- CERTIFICACIÓN N°11: *Queremos que nos certifiquen que les van a enviar a la promotora una notificación, donde conste que les hemos manifestado a Vds, que ni hemos tenido ninguna relación con la promotora ni con el propietario y que por tanto el hecho que manifiestan en su proyecto los promotores que dice que en la memoria regula las relaciones entre propietarios y BELVENTO SOLARE SL, no es cierto.*
- CERTIFICACIÓN N°12: *Queremos que nos certifiquen la validez o no del manifiesto de los promotores que donde dicen que “fijan un coeficiente de retribución en cumplimiento de lo dispuesto en el III.4.b. LOTUP”.*
- CERTIFICACIÓN N° 13: *Solicitamos que nos certifiquen las posiciones de representación de cada propietario en la UE2, con sus m² que tenga en propiedad y su porcentaje sobre el total de la UE2, y que conste que no es válido el proyecto presentado por los promotores por no reflejarlo en el documento expuesto al público.*
- CERTIFICACIÓN N° 14: *Solicitamos que nos certifiquen y justifiquen además el motivo por el que a nosotros nos mantienen dos superficies diferentes que nos afectan en la Memoria de los Promotores. Si incluso ellos desconocen la afección exacta de m² a nosotros e incurren en disparidad de cifras, ¿cómo se pretende mantener este proyecto ya que queda invalidado por inexacto?. Deben de certificarnos la superficie exacta afectada, directa e indirectamente y además las superficies resultantes de la reparcelación y de su contenido de uso. Y como esas superficies serán diferentes a la que ellos aportan en su proyecto, deberán certificarnos que van a notificar a la promotora y a nosotros, el resultado exacto de m² afectos a la ejecución del Vial Perpendicular para que cuando ellos tengan que rectificar su proyecto, podamos comprobar que se ajusta a la certificación obtenida.*
- CERTIFICACIÓN N°15: *Solicitamos que nos certifiquen cual es la superficie resultante después de la realización del vial perpendicular, tanto de la ejecución material del Vial perpendicular, como de las*

afecciones colindantes de aceras y retranqueos forzosos que lleve y la de la superficie del triángulo superior del vial perpendicular previsto, por si da lugar o no a una parcela mínima, reflejando cual es la superficie de parcela mínima en esa zona.

- CERTIFICACIÓN Nº 16: Solicitamos que nos certifiquen donde constan los cálculos y asignaciones de la gestión y reparto equitativo de beneficios y cargas que indican en la Memoria.

- CERTIFICACIÓN Nº 17: Solicitamos que nos certifiquen que han dado traslado a todas las áreas y empresas de suministros, servicios, alcantarillados, almacenamiento, distribución, comunicaciones, alumbrados y a ninguna empresa de ningún tipo, para que les conste que no concedemos ningún permiso gratuito que afecte a nuestra propiedad.

- CERTIFICACIÓN Nº 18: Solicitamos que nos certifiquen si los promotores han manifestado que tienen en su poder, y por tanto pueden realizar de forma inmediata, la oferta gratuita de nuestros terrenos a la Administración Local que es lo que se desprende de la Memoria de los Promotores. Si no lo pueden certificar, que se levante el correspondiente expediente por esta situación.

- CERTIFICACIÓN Nº 19: Solicitamos que nos certifiquen la no necesaria Alternativa Técnica: Proyecto de Urbanización, un proyecto de urbanización de Camí Real por la actuación de la realización del vial perpendicular.

- CERTIFICACIÓN Nº 20: Solicitamos que nos certifiquen si se ha realizado o se va a realizar la Declaración de Utilidad Pública de este Vial perpendicular. Y cuáles son los cálculos realizados para obligar a la realización de este Vial Perpendicular. Indiquen los aforos de vehículos afectados por esta necesidad de realizar un Vial Perpendicular a escasos metros de la esquina que rodea la parcela y las mejoras que se obtendrían de realizar este vial frente a no realizarlo. Y a quién va a beneficiar este nuevo trazado.

- CERTIFICACIÓN Nº 21: Solicitamos que nos certifiquen a que en cuanto a la manifestación de los promotores de que la “Unidad de Ejecución n2 (UE-2) de suelo urbano está parcialmente consolidada por la urbanización”, queremos que nos certifiquen cual es el porcentaje que está realizado y el porcentaje que falta por realizar.

- CERTIFICACIÓN Nº 22: Solicitamos que nos certifiquen si tienen constancia del régimen de gestión de propietarios del que dicen los promotores que la Corporación forma parte con ellos, ya que los promotores, en el régimen de gestión por propietarios del art. 114 LOTUP, los promotores expresan que “la expresada sociedad es la propietaria única, junto con la administración actuante, de la totalidad de los terrenos integrantes en el ámbito de la UE-2 de suelo urbano”. Queremos que nos certifiquen si es cierto que la Corporación está en esa gestión de propietarios y les han comunicado los promotores que todo el terreno integrante de la UE2 les pertenece.

- CERTIFICACIÓN Nº 23: Solicitamos que nos certifiquen que su Asesoría Jurídica va a dar traslado a la Fiscalía por si es objeto de actuaciones de oficio la manifestación solicitada en la certificación anterior número 22, donde en la Memoria presentada por los promotores, indican que la totalidad de los terrenos integrantes en el ámbito de la UE2 es de ellos o de la administración.

- CERTIFICACIÓN Nº 24: Solicitamos que nos certifiquen si los promotores pueden, en los plazos de ejecución del Programa de Actuaciones, dejar indefinido en todos los aspectos, de importes, fechas de ejecución, costes y repercusiones, cuotas asignadas de beneficios y costes, dejando sin determinar para el futuro el inicio de las obras de urbanización del resto del vial incluido en esta UE-2 (vial perpendicular a la Calle José Pintor Villa) que une esa calle con Camí Real, y que no sólo deja abierta la fecha sino que además, no reconoce que no ha adquirido esos terrenos y que difícilmente puede seguir presumiendo que dispone de todos los terrenos de la UE-2.

- CERTIFICACIÓN Nº 25: Solicitamos que nos certifiquen que los Promotores pueden dejar de cubrir las garantías de promoción (art. 151 LOTUP) que ellos no reflejan en su Memoria.

- CERTIFICACIÓN Nº 26: Solicitamos que nos certifiquen que les consta a la Corporación que los Promotores afirman ante la administración que no tengan pendientes otros compromisos en la UE2.

- CERTIFICACIÓN Nº 27: Solicitamos que nos certifiquen los motivos que hacen innecesario, en cuanto al procedimiento de tramitación, la necesaria evaluación ambiental.

Segon. - Aquest Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern va remetre per via telemàtica a l'Ajuntament el 29 de març de 2021 un escrit pel qual se li atorgava tràmit d'audiència per un termini de quinze dies, perquè poguera formular les al·legacions que considerara oportunes, així com aportar qualsevol informació sobre la reclamació que considerara rellevant, escrit rebut a l'Ajuntament el dia 30 de març, tal com consta en el justificant de recepció electrònic corresponent. Fins hui no s'ha rebut resposta de l'Ajuntament d'Aigües a aquest escrit.

Una vegada efectuada la deliberació de l'assumpte en la sessió del dia de la data d'aquesta Comissió Executiva, s'adopta aquesta resolució amb els següents

FONAMENTS JURÍDICS

Primer. - D'acord amb l'article 24.1 en relació amb el 42.1 de la Llei 2/2015 de transparència, bon govern i participació ciutadana de la comunitat valenciana (d'ara en avant Llei 2/2015 valenciana), l'òrgan competent per a resoldre les reclamacions que es presenten en el marc d'un procediment d'accés a la informació, és la Comissió Executiva amb caràcter previ a la impugnació en la jurisdicció contenciosa administrativa.

Segon. - Així mateix, l'administració destinatària de la sol·licitud d'accés a la informació pública objecte del present recurs –l'Ajuntament d'Aigües – es troba subjecta a les exigències de la llei esmentada, en virtut del que es disposa en l'article 2.1.d), que es refereix de manera expressa a “les entitats integrants de l'Administració local de la Comunitat Valenciana”.

Tercer. - En tercer lloc, i atés que l'article 11 de la Llei 2/2015 estableix així mateix que “Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés a la informació pública, mitjançant una sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les previstes en la llei. Per a l'exercici d'aquest dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.”

Cal concloure que la societat reclamant es troba igualment legitimada per a instar l'acció garantista d'aquest Consell a l'efecte de revertir la suposada falta de resposta de l'administració pública contra la qual es reclama.

Hem de tindre en compte que qui sol·licita la informació és BELVENTO SOLARE, SL, propietària de la parcel·la del Camí Real, núm. 5 d'Aigües, afectada per la UE-2, i, per tant, interessada en el procediment.

Dita la qual cosa, és necessari destacar la importància especial que mereix la posició de l'interessat i la particular connexió del dret d'accés a la informació amb el dret d'accés a l'expedient (article 53.1.a) Llei 39/2015). Així la disposició addicional primera, apartat primer de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, estableix que “La normativa reguladora del procediment administratiu corresponent serà l'aplicable a l'accés per part dels que tinguen la condició d'interessats en un procediment administratiu en curs als documents que s'integren en aquest”. El CTCV s'ha manifestat ja des d'un principi reconeixent un “règim especialment privilegiat d'accés” quan en un ciutadà que sol·licita una determinada informació exercint el dret d'accés exerceix també la posició jurídica d'interessat en l'expedient, s'entén que aquesta posició jurídica afavoreix les possibilitats d'accés a la informació. Així ho estableix la Resolució 48/2017 (Exp. 66/2016), “la concurrència del dret d'accés a la informació amb el dret d'accés a l'expedient de l'interessat també intensifica la posició jurídica de qui sol·licita la informació, al mateix temps que l'interessat gaudeix de la garantia que brinda la legislació d'accedir a l'òrgan de garantia com ho és aquest Consell”.

Quart. - Finalment, la informació sol·licitada (27 certificacions), encara que al principi poguera semblar que constitueix informació pública, per tractar-se de “continguts o documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que es troben en poder de l'Administració i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions”, (article 13 de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i article 4.1 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon

govern i participació ciutadana de la comunitat valenciana), caldrà valorar cadascuna de les sol·licituds per a poder determinar si la informació sol·licitada es troba englobada en aquest concepte o, al contrari no és així, i és a més que concorre causa d'inadmissió per això.

El CTCV ha assenyalat que “el dret d'accés a la informació no cobreix el dret a obtenir “certificats” per part de l'Administració, sinó exclusivament l'accés a la informació”.

Ara bé, que no hi haja dret a la certificació no exclou que les sol·licituds d'informació que escaiguen hagen de reconèixer-se sense que la facilitació d'aquesta informació per raó de la Llei de transparència implique una certificació.

Qüestió diferent és que amb la sol·licitud d'una certificació es pretenguen també afirmacions certificades que impliquen actes futurs que encara no s'han realitzat, perquè això no pot ser objecte del dret d'accés a la informació pública, ja que ni es troben en poder de l'Administració, ni han sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions (Resolució 97/2020, Exp. 14/2020, i Resolució 143/2020, Exp. 72/2020).

Així s'ha pronunciat també en la Resolució 45/2017 (Exp. 104/2016), i en les més recents Resolució 91/2020, Exp. 207/2019, i Resolució 97/2020, Exp. 14/2020 que en el FJ 4t manté que “el concepte d'informació pública parteix, doncs, d'una premissa inexcusable i és l'existència de la informació en el moment de formulació de la sol·licitud d'accés. D'això ve que les lleis de transparència no emparen les sol·licituds d'informació dirigides a obtenir còpies autèntiques o certificades, ja que aquestes tenen la consideració d'actes futurs, ja que es generen a conseqüència de la petició que es formula. Així l'accés a les còpies autenticades es correspon més amb documentació a la qual el sol·licitant té dret en qualitat d'interessat en el procediment, segons recull l'article 53.1 a) i b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques”.

Cinqué.- Per tant, i tornant al cas que ens ocupa, l'entitat reclamant sol·licita 27 “certificacions” (Certificar, segons la RAE, és “hacer constar por escrito una realidad de hecho”) que haurien d'expedir-se a conseqüència de la sol·licitud que es formula i, a més, en la majoria dels casos fan referència a actuacions que encara no s'han dut a terme, i que es corresponen amb el que hem anomenat “actes futurs” no compresos dins de l'exercici del dret d'accés a la informació pública. Dit això, el CTCV, a partir del principi esmentat de màxima transparència, considera que ha de donar-se compliment a aquelles sol·licituds que fan referència a documents o continguts *que consten en poder de l'Administració i hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions*.

Així doncs, les certificacions de les quals es demana “que se dé traslado inmediato a la Agencia Tributaria...” (7 primera part), “que conste que no se cumplen las precauciones del art. 108.b...” (9), “que les han comunicado a los promotores nuestro (sic) nombre correcto...” (10), “que les van a enviar a la promotora una certificación...” (11), “que nos justifiquen el motivo por el que a nosotros nos mantienen dos superficies diferentes...y que van a notificar a la promotora y a nosotros el resultado exacto de m2 afectos a la ejecución del vial perpendicular...” (14), o “que su Asesoría Jurídica va a dar traslado a la Fiscalía...” (23), i també que se certifique “si los promotores pueden...dejar indefinidos determinados aspectos” (24) o “si pueden dejar de cubrir las garantías de promoción” (25) o que certifique l'Administració que “les consta que los promotores afirman” (26), evidentment no fan referència a cap informació pública i excedeixen de les competències d'aquest Consell, per la qual cosa ha de ser inadmesa la reclamació en aquests apartats en virtut del que es disposa en l'article 116 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, en alguns d'aquests casos se sol·licita una acció de l'Administració que no té a veure amb el dret d'accés a la informació pública: “que se dé traslado inmediato a la Agencia Tributaria...” (7 primera part); (10), “que les van a enviar a la promotora una certificación...” (11); o “que su Asesoría Jurídica va a dar traslado a la Fiscalía...” (23).

Sisé. - D'altra banda, hi ha determinades sol·licituds en les quals facilitar la informació que es demana requereix una acció prèvia de reelaboració, la qual cosa suposa l'aplicació de la causa d'inadmissió de la sol·licitud establida en l'article 18.1 c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i s'entén per reelaboració (article 47 del Decret 107/2015): a) Quan l'organisme o entitat haja d'elaborar estudis, investigacions, comparatives o anàlisis específiques a aquest efecte. b) Quan s'haja de fer una tasca complexa o exhaustiva per a facilitar la informació sol·licitada. c) Quan l'organisme o entitat manque dels mitjans

tècnics que siguin necessaris per a extraure i explotar la informació concreta que se sol·licita, i resulte impossible proporcionar aquesta informació o li resulte molt onerosa.

El CTCV manté que aquesta causa d'inadmissió ha d'interpretar-se segons el CI 007/2015 del CTBG i així ho posa de manifest en la Resolució 162/2019 (Exp. 85/2019) entenent que es donarà aquesta quan “deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada”, i el Decret 105/2017 en l'article 47 que “en cap cas s'entendrà per reelaboració un tractament informàtic habitual o corrent.”

Per part seua, el TS (St. 306/2020, FJ 5é) estableix que l'acció bàsica i general que es correspon amb les tasques inherents a qualsevol subministrament d'informació, i que pot comprendre una certa reelaboració, no comporta la inadmissió. Entén que “la reelaboración que produciría causa de inadmisión requiere tener como rasgo la existencia de complejidad”, i en aquests cas concorreria la causa d'inadmissió tenint en compte les operacions que comportaria l'accés -reunir informació dispersa, ordenar i sistematitzar i adaptar des de diferents formats-, perquè es tracta de tornar a elaborar a partir d'una informació pública dispersa i disseminada, mitjançant una labor consistent a recaptar, primer; ordenar i separar, després, el que és informació classificada o no; sistematitzar, i després, en fi, divulgar tal informació.

D'entre les referides anteriorment, cal considerar que constitueixen una acció de reelaboració les següents, ja que imposen una acció que no és la pròpia de buscar la informació sol·licitada: “que conste que no se cumplen las precauciones del art. 108.b...” (9), “que les han comunicado a los promotores nuestro (sic) nombre correcto...” (10), “que nos justifiquen el motivo por el que a nosotros nos mantienen dos superficies diferentes...y que van a notificar a la promotora y a nosotros el resultado exacto de m2 afectos a la ejecución del vial perpendicular...” (14), , “así como que se certifique si los promotores pueden...dejar indefinidos determinados aspectos” (24) o “si pueden dejar de cubrir las garantías de promoción” (25).

I també cal considerar que impliquen una reelaboració aquelles sol·licituds en les quals se sol·licita, per exemple, “se certifiquen los m2 que pueden verse afectados por las pretensiones de los promotores” (2), “superficie del triángulo de la parcela que quedaría por encima del vial...” (3), “superficie total y real de la UE-2 aprobada en las NNSS y los motivos de las discrepancias que aparecen y los responsables de su autorización” (4 primera parte), “superficie que dice que tiene en propiedad Aquaviva 2000, SL (5), o “que todos los terrenos afectados por la UE-2 disponen del mismo valor catastral, de igual repercusión fiscal y de tipo impositivo, y por lo tanto, de igualdad en el IBI” (6). Aquestes sol·licituds requereixen clarament una elaboració expressa que comportaria una investigació *ex profeso* i que no pot facilitar-se amb un senzill tractament informàtic, per la qual cosa és procedent desestimar la reclamació per considerar que concorre la causa d'inadmissió prevista en l'article 18.1.c) de la Llei 19/2013, com hem indicat.

En els mateixos termes es veuen afectades les sol·licituds d'informació que es corresponen amb les certificacions número 8 (legalitat de la relació del traspàs de drets urbanístics), 12 (validesa o no del manifest dels promotors) i 13 segona part (que conste que no és vàlid el projecte presentat pels promotors), que requereixen una valoració jurídica, així com la número 15 en la qual sol·licita que se li certifique quina és la superfície resultant després de la realització del vial..., la 17 de la qual demana que se certifique que s'ha donat trasllat a totes les àrees i empreses de subministraments, serveis, clavegueram, ...fent-los constar la seua oposició, la 18 sobre si els promotors han manifestat que tenen en el seu poder l'oferta gratuïta dels terrenys, la 19 relativa a la no necessària alternativa tècnica: Projecte d'urbanització, que se certifique l'obligatorietat de realitzar aquest projecte, o la 20 en l'últim incís en demanar que s'indique quins són els càlculs realitzats per a obligar a la realització del vial, així com els aforaments de vehicles afectats... i les millores que s'obtindrien si es realitzava el o no. Totes aquestes necessiten l'elaboració de determinades actuacions prèvies (informes, investigacions...) a la divulgació de la informació que sol·licita.

Seté. - Finalment, aquest Consell considera que sí que haurà de facilitar-se al reclamant la informació sol·licitada, sempre que conste ja com a tal en el projecte de reparcel·lació, i sense que haja de realitzar-se elaboració o actuació prèvia, respecte de les següents:

- si l'Ajuntament disposa d'informació relacionada amb la superfície real de la parcel·la corresponent al Camí Real, núm. 5 (1),
- o amb el nombre de propietaris afectats i la superfície individual dins de la UE-2 (4 segona part),
- si consta la valoració donada per l'Administració a efectes expropiatoris mínims (7 segon incís),
- la posició que representa cada propietari en la UE-2 amb els m² que tinga en propietat i el seu percentatge sobre el total de la UE-2 (13 primera part).
- si coneix on consten els càlculs i assignacions de la gestió i repartiment equitatiu de beneficis i càrregues indicats en la memòria (16)

També escau reconèixer el dret d'accés a la informació pública respecte d'altres sol·licituds, si bé, dependrà del fet que existisquen circumstàncies que aquest Consell no coneix. Així, sí que escau facilitar la informació sobre si hi ha declaració d'utilitat pública o informe d'avaluació ambiental, o bé si existeix un règim de gestió de propietaris i l'Ajuntament disposa d'aquesta informació de manera condicionada. Això succeeix respecte de les sol·licituds d'informació:

- en la 20 primera part (si s'ha realitzat o es realitzarà la declaració d'utilitat pública del vial perpendicular),
- 21 (quin és el percentatge que està realitzat i el que falta per realitzar),
- 22 (règim de gestió de propietaris)
- 27 (sobre l'avaluació ambiental).

En aquests casos, haurà de ser facilitada al reclamant sempre que això no exigisca reelaboració, i si es coneix el percentatge realitzat i per realitzar, també se li ha de proporcionar, atés que es tracta d'una informació a la qual es pot accedir fàcilment amb un senzill tractament informàtic.

Per tant, és procedent estimar la reclamació en aquells punts de la sol·licitud en els quals es tracte d'informació que es troba en poder de l'Administració i que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions, sense que haja d'emetre's cap certificat sobre aquest tema, i cal, per tant, facilitar al reclamant la informació sol·licitada en els números recollits aquest fonament, i no admetre la reclamació pel que fa a aquells apartats que no són competència d'aquest Consell, per no ser informació pública el que realment s'està demanant, tal com ve definida en la Llei de transparència, i desestimar la reclamació quant a la resta per resultar d'aplicació la causa de l'article 18.1.c) per ser necessària una acció prèvia de reelaboració per a la divulgació de la informació.

Nové.- Per a concloure, cal recordar a l'Ajuntament d'Aigües l'obligació de resoldre de l'Administració, recollida no sols amb caràcter general per la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que en l'article 21 estableix l'obligació de l'Administració de dictar resolució expressa i notificar-la, en el termini màxim fixat per la norma reguladora corresponent, en tots els procediments, i en aquest sentit l'article 17 de la Llei 2/2015 de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, estableix que “les sol·licituds d'accés a informació pública, hauran de resoldre's i notificar-se al sol·licitant i als tercers afectats que l'hagen sol·licitat en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per a resoldre.”

RESOLUCIÓ

En atenció als antecedents i fonaments jurídics descrits, la Comissió Executiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, acorda

Primer. – Estimar la reclamació presentada el 27 de març de 2021 per la societat Belvento Solare, SL, formulada contra l'Ajuntament d'Aigües, i concedir el dret d'accés a la informació sol·licitada en els punts i en els termes exposats en el FJ 7é, i instar la corporació a facilitar al reclamant la informació en el termini de dos mesos des de la notificació de la present resolució.

Segon. – Inadmetre la reclamació referent als punts indicats i en els termes recollits en el FJ 5é per no ser competència d'aquest Consell.

Tercer. – Desestimar la reclamació en els apartats detallats en el FJ 6é, per considerar d'aplicació la causa d'inadmissió de la sol·licitud de l'article 18.1.c).

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

**EL PRESIDENT DEL CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS
A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN**

Ricardo García Macho